

Estallidos sociales y escenarios de ingobernabilidad*

Andrés Benavente Urbina**

Introducción

La década de los noventa y los años que llevamos del nuevo siglo muestran una innegable estabilidad de los sistemas democráticos en América Latina. Los clásicos golpes de Estado dejan de interrumpir la permanencia de gobiernos democráticos y la amenaza insurreccional, salvo el caso colombiano, comienza a decrecer, fundamentalmente luego de los acuerdos de paz en Centroamérica.

Es más, los sistemas institucionales se mostraban sólidos incluso para canalizar dentro de sus mecanismos complejos problemas y serias crisis políticas que se plantearon en diversos países. El recurso al juicio político como mecanismo de destitución presidencial fue aplicado en casos como los de Fernando Collor de Melo en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela, sin que ello provocara quiebres o escenarios de ingobernabilidad.

Sin embargo, luego del promedio de los años noventa y junto con situaciones de crisis económica, fue emergiendo un método –originariamente concebido sólo como mecanismo de presión– que sin apuntar necesariamente a un quiebre institucional buscaba generar climas crecientes de ingobernabilidad a través de los cuales lograr la caída del gobierno. Es el caso de las movilizaciones sociales rupturistas, fenómeno sociopolítico al cual hemos denominado Rupturismo Social.

El rupturismo social es una expresión de movilización de protesta extendida y violenta que apunta a cuestionar la institucionalidad vigente en un país determinado y, en algunos casos, de manera muy especial y fundamental, su modelo económico, aun cuando no se encuentre consolidado o esté en los inicios de su implantación.

* Ponencia presentada al Seminario Internacional “Objetivos Estratégicos del Hemisferio para la próxima década”, Universidad Internacional de Miami, 17-20 de marzo de 2004.

** Analista Político, Coordinador del Área de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Central, Consejero del Centro de Estudios Hemisféricos Alexis de Tocqueville, Buenos Aires, e Investigador Asociado Centro Norte-Sur, Universidad de Miami, Estados Unidos de Norteamérica.

En la última década podemos mencionar diversos ejemplos en que las movilizaciones sociales rupturistas han tenido éxito en su objetivo de promover la caída de gobiernos aunque manteniendo el formalismo institucional. En Argentina está la caída de Fernando de la Rúa el año 2001; en Bolivia, la de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003; en Ecuador la renuncia de Abdalá Bucaram de 1997 y luego la deposición de Yamil Mahuad el 2000; en Paraguay la renuncia de Raúl Cubas en 1999; en Perú la caída de Alberto Fujimori el 2001; y en Venezuela la caída y reposición de Hugo Chávez el año 2002. El caso más reciente ha sido el de Jean Bertrand Aristide en Haití. En varios de estos casos, el factor de crisis económica fue el elemento más visible en la agudización de las movilizaciones; en otros ha servido como el contexto que ha cimentado fuertemente el argumentario político de confrontación.

Ciertamente que las mencionadas no son las únicas experiencias de movilizaciones rupturistas. En noviembre del 2003, movilizaciones violentas provocaron la dimisión del Presidente de Georgia, Eduard Shevardnadze, siendo reemplazado hasta la convocatoria de nuevas elecciones por la presidenta del Parlamento, Nino Burdzhnashvili. En Haití, en 1986, fue un clima agitativo violento y persistente el que termina por derrocar a la dinastía Duvalier, pero tales movilizaciones empujaron a uno de los clásicos golpes militares. En ese mismo año, las movilizaciones sociales incentivaron a las Fuerzas Armadas filipinas a deponer al Presidente Ferdinand Marcos para luego declarar la validez de las elecciones presidenciales anuladas y traspasar el poder a Corazón Aquino; en 1989 los estallidos sociales terminan con el régimen totalitario de Ceacescu en Rumania, rompiendo la institucionalidad e inaugurando un proceso de transición a la democracia. En la lejana década del setenta, en Irán, las movilizaciones sociales rupturistas antecedieron a la caída del Sha y derrumbaron el intento de transición institucionalizada del primer ministro Shahpur Bajtiar, para posibilitar la instauración de la república teocrática islámica del Ayatolá Jomeini¹. Son casos que no son plenamente asimilables a los latinoamericanos que nos proponemos estudiar, pero que revelan que las movilizaciones y estallidos sociales no son mecanismos nuevos para derribar gobiernos. Lo novedoso radica en las características que singularizan al rupturismo social latinoamericano de los últimos años.

Retornando a América Latina como unidad de análisis, puede decirse que en los años ochenta, cuando emergieron los movimientos sociales subrogando a los partidos políticos en los escenarios autoritarios de América Latina, un planteamiento teórico que avanzaba sobre las futuras movilizaciones rupturistas sostenía que los movimientos sociales conformaban «una dinámica que se genera en la sociedad civil, la cual se orienta intencionalmente a la defensa de intereses específicos. Su

¹ Véase al respecto: Heikal, Mohamed «El regreso del Ayatollah. La Revolución Iraní de Mossadeq a Jomeini», Barcelona, editorial Argos Vergara, 1982.

acción se dirige a cuestionar de manera fragmentaria o absoluta las estructuras de dominación prevalecientes y su voluntad implícita es transformar parcial o totalmente las condiciones del crecimiento social»².

1. Factores de rupturismo social en América Latina

El contexto en que se da el rupturismo social en América Latina a contar del promedio de la década de los noventa está caracterizado por varios factores que inciden en su potenciamiento: escenarios de crisis económica, persistencia de la corrupción y subestimación de la política.

a. La subestimación de la política

En la última década América Latina ha ido evidenciando de manera cada vez más clara una profunda crisis de la política, por más que ésta se reivindicó parcialmente luego del colapso de los regímenes autoritarios de los años sesenta y setenta. Reivindicación frágil por cuanto no supo asumir oportuna y cabalmente el desafío de modernizarse y volverse eficiente, prefiriendo en cambio retomar antiguas prácticas de clientelismo que ya no se avenían con los formidables procesos de transformación económica que comenzarían a verificarse de manera extendida en los inicios de los años noventa.

Es inquietante cómo los partidos políticos han sido sobrepasados, en cuanto la democracia, para su normal funcionamiento, necesita de partidos sólidos como entidades mediadoras y canalizadoras de las inquietudes públicas de la población. En América Latina se percibe, en general, a los partidos políticos como negativos, como núcleos de luchas intestinas, incapaces de diseñar políticas consistentes y con inclinaciones corruptas. Esto ha ido consolidando, en varios países, un sentimiento contrario a los partidos, tanto en el nivel de las elites intelectuales como en el electorado en general. Protagonistas de un proceso de farandulización de la política (en cuanto se ven sobrepasados por la creciente importancia de los medios de comunicación), los partidos han contribuido en algunos países al debilitamiento de la democracia y de la credibilidad del sistema institucional, favoreciendo directa o indirectamente los liderazgos populistas, que se dan en un escenario donde el ritual electoral se mantiene sólo como un revestimiento formal de estilos autoritarios de gobierno.

En este contexto se presentan agudos problemas sociales, respecto de los cuales los gobiernos no son percibidos con capacidad para resolverlos, lo que afecta a la credibilidad de las instituciones. Esto da lugar a extendidas movilizaciones de protesta sin características ideológicas significativas que expresan más bien un

² Camacho, Daniel. Introducción al libro «Los Movimientos Populares en América Latina», Daniel Camacho y Rafael Menjivar, coordinadores, México, Editorial Siglo XXI, 1989, pag. 15.

estado de ánimo con mezcla de ira y frustración. Si los partidos políticos están afectados por una crisis de representatividad lo más probable es que se termine en una crisis de gobernabilidad.

En efecto, en los inicios de la década pasada, antes que el rupturismo social se visibilizara, un politólogo chileno advertía: «Las formas más miserables de pobreza presentan un grueso escollo a la eficiencia de las democracias latinoamericanas. Si al cabo del ejercicio de varios gobiernos democráticos los problemas sociales se mantuvieran o agudizaran (...) la adhesión a la democracia, tan masiva y extendida como la vemos hoy, podría ceder paso a un retorno hacia opciones autoritarias no necesariamente gestadas en el seno militar»³. Años más tarde esta advertencia se ha ido materializando de manera innegable.

b. La Corrupción

La corrupción es uno de los factores que pone en peligro la estabilidad de las democracias y es un obstáculo insalvable para garantizar la gobernabilidad de los países y la seguridad de las sociedades involucradas. Conjuntamente con los costos económicos y sociales que ella acarrea, las consecuencias políticas son también graves en tanto la corrupción del sector público pone en juicio la credibilidad y legitimidad de los gobiernos.

Precisándola conceptualmente, Jean François Revel dirá que: «ser corrupto es utilizar de una forma cualquiera, directa o indirecta, el poder político o administrativo fuera de su campo legítimo, para procurarse ventajas, en dinero o en especie, y para distribuir las a sus amigos, servidores, parientes o partidarios»⁴.

La corrupción puede llegar, si se generaliza en una sociedad, a transformarse en un factor de amenaza para la estabilidad del propio sistema institucional, en cuanto compromete conductas que tienden a desviar el normal y correcto ejercicio del poder político, del poder legislativo, de los servicios judiciales o de las instancias económicas-institucionales. La característica más problemática que presenta es que no siempre es posible visualizar conductas jurídicamente delictivas o que puedan efectivamente probarse, quedando a veces la duda —cuando se hace visible en parte— si se trata de ilícitos penales, civiles o meramente administrativos. La corrupción es una especie de delincuencia subterránea frente a la cual la sociedad sólo reacciona cuando el problema alcanza la magnitud de una crisis generalizada.

América Latina ofrece una larga tradición de esquemas estatistas, muchas veces agudizados con dosis de populismo. En estas experiencias ha quedado en eviden-

³ Jaraquemada, Jorge: «La eficiencia como condición y desafío de la democracia», en Revista «Política», Santiago de Chile, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, junio de 1993.

⁴ Revel, Jean François: «El Renacimiento Democrático», Barcelona, editorial Plaza & Janes, 1992, pag. 380.

cia que la sobrecarga de demandas que soporta un Estado intervencionista plantea un serio desafío de gobernabilidad del sistema político-institucional y lleva al colapso de políticas económicas. Hay casos en que en vez de decidirse a reducir el tamaño del Estado, políticos y gobernantes se afanaron en tratar de disminuir las presiones sobre el sistema para hacerlo más gobernable. Lo que se terminó consiguiendo fue una degeneración aun más grave de la intervención estatal: el Estado prebendista donde la corrupción se entroniza.

La corrupción horada fuertemente la credibilidad en las instituciones y en la propia democracia. Su manipulación discursiva contribuyó de manera importante a legitimar socialmente el autogolpe de Fujimori en Perú y a dar forma al fuerte respaldo electoral con que llega al poder Hugo Chávez en Venezuela.

En el orden político la corrupción involucra a gobiernos, legisladores, partidos políticos, jueces, funcionarios de la burocracia. Sus repercusiones en América Latina han llegado a ser de tal magnitud que en la última década tres Presidentes de la República han sido destituidos de sus funciones bajo acusaciones de participar en actos considerados corruptos: Fernando Collor de Melo en Brasil; Carlos Andrés Pérez en Venezuela y Abdalá Bucaram en Ecuador, a lo que hay que agregar que la huida y renuncia de Alberto Fujimori se basa, entre otros elementos, en la publicidad que se dio a videos en los cuales aparece su principal asesor practicando el soborno como método común de agregación de apoyos.

En cuanto a la vinculación entre corrupción y narcotráfico, baste recordar el poder corruptor de los Carteles en la política colombiana, donde la mayor permeabilidad se dio en el financiamiento de la campaña electoral del Presidente Ernesto Samper en el promedio de los años noventa. Hechas las investigaciones pertinentes y llevados a cabo los procesos judiciales de rigor quedó fehacientemente establecido que el tesorero y el director de la campaña recibieron dineros ilícitos provenientes del narcotráfico. Samper se salvó del enjuiciamiento sólo porque la mayoría parlamentaria no lo despojó de la inmunidad del cargo presidencial. Todo ello se daba en un ambiente político y social que describe bien Fernando Cepeda: «De todos los sectores y grupos que han sido infiltrados o manipulados por los barones de la droga, los congresistas han sido los más vulnerables a las estrategias de los carteles de la droga»⁵.

c. Las crisis económicas

El rupturismo social se expresa también y de manera importante en medio de escenarios de crisis económicas. En la región, uno de los más serios problemas que se derivan de la actual crisis económica es el fuerte cuestionamiento que sufre la economía de mercado en cuanto estrategia de desarrollo viable en la región.

⁵ Cepeda, Fernando: «El Congreso Colombiano ante la crisis», en Leal, Francisco: «Tras las huellas de la Crisis Política», Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1996, pag. 93.

La década de los noventa comienza con la expansión del llamado Consenso de Washington, donde se admitía que el Estado sobredimensionado con presupuestos deficitarios era el responsable del atraso, del endeudamiento y de la pobreza; y que por lo mismo se hacía necesario rediseñar su tamaño y funciones, así como modernizarlo para hacerlo realmente eficiente en el cumplimiento de sus tareas.

Pudo parecer que América Latina se encaminaba en materia económica por una senda rectificatoria y fundacional a la vez, cuando en la primera mitad de los años noventa en varios de nuestros países (salvo Chile que los había antecedido) se llevaron a cabo las reformas estructurales del Estado y de la economía. Las transformaciones elaboradas y aplicadas por equipos de técnicos que no actuaban con los estrechos criterios del clientelismo político, en muchas experiencias sólo fueron parciales por falta de voluntad política de los gobernantes.

Las insuficiencias hay que ubicarlas en varios lados. Algunas de ellas son de omisión. En algunas experiencias, aún siendo muy distintas entre sí, no hubo mayor preocupación por proyectar el sello transformador más allá del caudillo o líder que encabezaba el proceso. Ni Fujimori ni Menem tuvieron esa preocupación. El primero más centrado en evitar que surgieran liderazgos competitivos entre sus seguidores y el segundo haciendo todo lo posible, por idéntica razón, para que la audaz reforma que había impulsado en Argentina no tuviese otros conductores que él mismo, todo lo cual no hizo sino catapultar dentro del peronismo la figura opaca de Eduardo Duhalde, con más nostalgias del Estado interventor que con voluntad de profundizar la liberalización iniciada por Menem.

En otros casos el problema reside en que las transformaciones fueron impulsadas, incluso con gran perseverancia, por quienes política y culturalmente habían sido tributarios de concepciones estatistas y que, por realismo político o por una particular visión del futuro, se decidieron a tener un punto de inflexión en sus propias trayectorias e impulsar un modelo diametralmente opuesto. Este es el mérito de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, otrora autor de la llamada «teoría de la dependencia», y de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, que en la década de los cincuenta había sido el gran nacionalizador de empresas. Sin embargo, queda la duda hasta dónde este oportuno cambio de dirección fue valórico o simplemente fue considerado una respuesta adecuada para enfrentar una determinada coyuntura de crisis.

Sin alternativas que signifiquen un correlato en el plano político del proyecto de transformación económica de libre mercado, no tiene mucho de extraño, en verdad, que en momentos de crisis de esta estrategia de desarrollo quienes habían sido sus sostenedores instrumentales se diluyan y vuelvan a aparecer con fuerza las recetas del intervencionismo o del populismo estatal, con un atractivo lenguaje demoledor, pero con una absoluta incapacidad de articular e implementar salidas eficientes de futuro. Su oferta se agota en prometer volver a caminar un sendero ya recorrido y que, por lo mismo, se sabe que sólo conduce a la profundización de los problemas.

Llevando el tema de las crisis económicas a las expresiones de rupturismo social, es recurrente ver cómo uno de los argumentos con que se sostienen las movilizaciones es oponerse –incluso con violencia agitativa– al Fondo Monetario Internacional, al que se pretende responsabilizar de los males económicos de la región.

En la crisis de la deuda externa latinoamericana, que terminó por empujar la crisis terminal del Estado de Bienestar, se le imputaba «intervenir en la política interna de los países deudores, de violar la soberanía nacional de éstos, de agudizar las crisis imponiendo cargas insoportables a las clases postergadas»⁶. El FMI pasaba a ser una suerte de «chivo expiatorio», sin que los gobiernos fueran capaces de asumir su propia responsabilidad en la gestación de la deuda para cuyo servicio, en medio de la crisis, recurrían a la entidad financiera internacional. Muchas de las imputaciones que se le hacen en los primeros años del nuevo milenio no son tan distintas⁷.

2. Características de las movilizaciones sociales rupturistas o estallidos sociales

En primer lugar, las movilizaciones rupturistas se dan en un ambiente de descontento generalizado en la población que puede tener una motivación múltiple, en algunos casos específicos es de tipo político, pero en general es de orden económico. Las situaciones de crisis económica y financiera de un país sirven de motivación inmediata a las movilizaciones o bien configuran un marco contextual para que se expandan.

En segundo lugar, si bien las movilizaciones no son armadas de manera regular, como acontece en las insurreccionales, tienen un claro carácter agitativo y, por lo mismo, hay un componente cada vez más creciente de violencia callejera que termina por desbordar a las fuerzas policiales. La convulsión social, al ser extendida y mantenerse en el tiempo, genera una abierta situación de ingobernabilidad.

En tercer lugar, las instituciones y los mecanismos de resolución de conflictos son sobrepasados. No resultan eficientes para enfrentar la situación con miras a neutralizarla y entran en una crisis de legitimidad. A medida que la situación se polariza, los mecanismos institucionales e incluso las mediaciones externas (la Iglesia Católica en el caso boliviano) se agotan.

En cuarto lugar, las Fuerzas Armadas –que en otras coyunturas históricas habrían sido actores protagónicos a través del abandono de su no deliberación e interven-

⁶ Komer, Peter y otros: «El FMI: ¿gerente de crisis para el Tercer Mundo?», en Revista Nueva Sociedad N. 67, Caracas, julio-agosto de 1983.

⁷ Véase sobre la materia, Althaus, Karl: «El Fondo Monetario Internacional, crisis económicas e interpretaciones políticas», Documento de Trabajo, Santiago de Chile, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales, 2003.

ción directa— asumen el rol de sujetos pasivos que obviamente no se salen de los cauces institucionales, lo que les permite adecuarse de manera fácil y oportuna a los nuevos escenarios una vez que el gobierno ha caído.

En quinto lugar, y esto resulta clave para entender el factor anterior, no hay ruptura institucional. El término del gobierno, cuando triunfa el rupturismo social, se hace bajo el revestimiento del procesalismo de la institucionalidad democrática. A Bucaram, como resultado de las movilizaciones, el Congreso Nacional lo declaró mentalmente inhábil para el cargo; a Fujimori, junto con rechazársele la renuncia, el Congreso declaró la vacancia presidencial; los demás renunciaron y fueron reemplazados de acuerdo a la aplicación de las normas constitucionales de sucesión presidencial. Tras la caída de Aristide en Haití el 2004, asumió quien constitucionalmente debía hacerlo en caso de acefalía del Ejecutivo: el Presidente de la Corte Suprema.

Con todo, hay experiencias donde las movilizaciones rupturistas no han logrado la caída del gobierno, pero su intensidad ha generado su aislamiento o la parálisis de su ímpetu transformador, como acontece con el llamado «caracazo» en Venezuela, donde ocurren movilizaciones violentas en contra de las políticas económicas del segundo gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez en 1989 y que serán el antecedente inmediato del posterior levantamiento armado del teniente coronel Hugo Chávez en 1992.

En sexto lugar, hay que considerar que lo anterior es posible porque las movilizaciones configuran una situación de rebeldía que no es fundacional. Tienen propósitos concretos y específicos: terminar con una determinada situación y no sienten que tengan la misión de instalar un nuevo orden político. De allí que despejado el objetivo no hay mayores dificultades para la sucesión institucional del gobierno.

Expresan un consenso de término, esto es la necesidad de terminar con un estado de cosas que se rechaza, pero no expresan ningún consenso programático. El futuro es siempre incierto, no es previsto en medio de las protestas, sólo se busca el fin del gobierno en contra del que se reclama. En términos de construcción, el futuro comienza en la hora siguiente en que cae el gobierno y, por lo mismo, siempre será un salto al vacío. De allí que a los protagonistas de los estallidos sociales les es aplicable el comentario que Jacques Ellul hace de las rebeliones, trazando una analogía con los antiguos pueblos nómadas belicosos: «pueden invadir ciudades, después no saben qué uso hacer de ellas. Entonces, saquean, queman, arrasan y continúan siendo nómadas, siguen acampando en sus tiendas a las puertas de las ciudades que acaban de conquistar»⁸.

Séptimo, las movilizaciones sociales rupturistas dan paso, cuando tienen éxito, a gobiernos transicionales que completan el período presidencial abortado o perma-

⁸ Ellul, Jacques: «Autopsia de la Revolución», Madrid, Unión Editorial, 1973, pag. 17.

necen en el poder hasta nuevas elecciones. Su tarea tampoco es fundacional, sino que consiste en manejar lo mejor posible la crisis heredada para relegitimar las instituciones. En este período sigue prevaleciendo la incertidumbre institucional, especialmente si la motivación de las movilizaciones ha sido de tipo económico. Las nuevas autoridades quedan bajo la presión de la rebeldía social y condicionadas en el ejercicio de sus funciones. Eso se refleja muy bien con relación al frágil ambiente de la economía de mercado en Argentina y Bolivia. La discrecionalidad de Duhalde y la vacilación de Mesa respectivamente, se explican, en parte importante, por el entorno social y político en que llegaron a ejercer las funciones de gobierno.

Finalmente, en octavo lugar, hay que decir que las movilizaciones rupturistas y los estallidos sociales son mecanismos de presión neutros y que, por lo mismo, no se asocian directamente a determinadas tendencias ideológicas, y bien pueden ser usados para protestar en contra de gobiernos de inspiración socialista (Chávez y Aristide) como en contra de los que son acusados de representar esquemas «neoliberales». A lo que sí es posible asociar mayormente el rupturismo social es a expresiones radicalizadas de neopopulismo, aunque también con excepciones.

3. La crisis de gobernabilidad: De movilizaciones a estallidos sociales

Por cierto, no toda movilización social, por radicales que sean sus demandas, constituye una expresión de rupturismo social. El elemento constitutivo de lo último es la capacidad de esas movilizaciones radicales de desbordar las instituciones.

Una primera fase se expresa cuando las movilizaciones provocan una deficiente respuesta gubernativa en cuanto a procesarlas por los cauces institucionales y se dan las primeras señales de desborde. En el seno del gobierno pueden evidenciarse también las primeras fracturas.

En una segunda fase queda reflejado el bajo respaldo social del gobierno. No tanto en el orden general, sino en relación al conflicto que se plantea. Si frente a la resolución del conflicto generado por las movilizaciones sociales radicales, la población, expresada en términos de opinión pública, no apoya al gobierno o incluso rechaza sus comportamientos, éste va perdiendo legitimidad social en su capacidad de respuesta.

Una tercera fase dice relación con la reproducción de la pérdida de credibilidad y de confianza del gobierno entre la población en el escenario político. Entonces el gobierno va quedando aislado incluso con riesgo de disociación en su coalición política, cuando la hay.

Una cuarta fase de agudización de la crisis de gobernabilidad se plantea cuando el gobierno tiene ante sí una situación de convulsión que no puede controlar. Comienza a percibirse en la población y en los actores políticos que el gobierno no termina-

rá su mandato, predomina –por consiguiente– la incertidumbre sobre la resolución del conflicto. El escenario se torna absolutamente polarizado, siendo cada vez más difícil encontrar instancias de mediación para reencauzar el conflicto. Las fuerzas policiales llamadas a controlar el orden están totalmente desbordadas.

Una quinta fase acontece cuando las Fuerzas Armadas –que no han mostrado interés por salirse de los cauces institucionales e intervenir directamente– dan señales de distanciamiento del gobierno en crisis, lo cual incentiva aún más a los actores comprometidos con el rupturismo. La percepción por el gobierno de que ya no cuenta con el respaldo de quienes detentan la fuerza legítima del Estado es uno de los factores, además de la escalada de violencia en las movilizaciones, que lo lleva finalmente a dimitir para salvar lo que queda de la frágil institucionalidad. Esta es la fase de la ingobernabilidad.

Conclusivamente se puede sostener que los estallidos sociales, como culminación de las movilizaciones radicales y en cuanto expresión del rupturismo social, revelan la ineptitud del gobierno para responder al desafío de gobernar, que es manejar de manera eficiente escenarios interactivos, procurando el equilibrio entre factores diversos y no pocas veces contrapuestos. La ingobernabilidad muchas veces adviene ante el claro déficit en la capacidad de conducir estas nuevas realidades.